DATOS SENSIBLES

TOCA: 447/2017

JUICIO: DIVORCIO INCAUSADO

APELANTE: *****

PONENTE: MGDO. DAVID LÓPEZ MUÑOZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LIC.
MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ MORENO

Ciudad Judicial, Puebla, a tres de enero
de dos mil dieciocho.

V I S T O para resolver el toca **447/2017**, del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativo al recurso de apelación interpuesto por ***** , en contra de la resolución de once de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente ***** , referente al Juicio de Divorcio Incausado, promovido por **la apelante**, en contra de ***** ;
y

R E S U L T A N D O

1. En el expediente ***** , del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el once de abril de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva al tenor de los siguientes

puntos resolutivos: **“PRIMERO. Ha sido procedente la solicitud de divorcio promovido por ***** en contra de *****.- - SEGUNDO. Se declara DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL celebrado el dieciocho de marzo de dos mil ocho, entre ***** y ***** , bajo el régimen de sociedad conyugal, ante la fe del Juez del Registro Civil de Santa María Xonacatepec, de esta ciudad.- - TERCERO. Ambas partes recobran su capacidad legal para contraer nuevas nupcias.- - CUARTO. Se declara disuelta la Sociedad Conyugal que se formó con motivo del matrimonio.- - QUINTO. Se deja expedito el derecho de las partes para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por cuanto concierne al convenio.- - SEXTO. Ejecutoriada que sea esta sentencia, remítase copia certificada de la misma al Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Santa María Xonacatepec, Puebla, a fin de que haga la anotación correspondiente en la del matrimonio disuelto.- - SÉPTIMO. Con la misma oportunidad, expídase a los interesados tantas cuantas copias certificadas sean solicitadas de esta resolución, a fin de que gestionen el acta de divorcio.- - NOTIFIQUESE...”**

2. Inconforme con esta resolución, ***** , interpuso el recurso de apelación que da origen a este toca; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. De conformidad con los artículos 396 y 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, esta Sala sólo tomarán en consideración los agravios expresados por la apelante, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra hubieren sido transcritos.

SEGUNDO. La apelante *****,
expone:

Que se violan en su perjuicio los artículos que indica en su escrito recursal, porque el Aqno al señalar en la impugnada que el demandado debe suministrar alimentos de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 487 del Código Civil, en virtud de que dentro del matrimonio como se pudo constatar se procrearon dos hijos de nombres ***** y *****, ambos de apellidos *****, por lo que el Juez de origen determinó una pensión provisional para los menores por la cantidad de ***** mensuales, que debe exhibir el deudor por ministraciones anticipadas; lo cual resulta ilógico e incongruente, que además de no estar en conformidad a lo solicitado por la recurrente en el convenio que se anexó en la demanda inicial, toda vez que sólo se basó en un informe proporcionado por el demandado en la contestación, sin antes agotar lo necesario para allegarse de los elementos probatorios de convicción necesarios para conocer la verdad,

aunado a que no tomó en cuenta el interés superior de los menores, dejándolos en estado de indefensión y abandono, toda vez que como lo mencionó la inconforme anteriormente, el Juzgador jamás pidió los elementos de pruebas necesarios para corroborar y tener en este caso acreditada la necesidad de los alimentos; que si bien es cierto que el Juez de origen tiene que resolver sobre la cuestión de los alimentos de los menores, también es cierto que pudo haber dejado en el derecho de ejercitarlo en la vía correspondiente y basarse solamente en la disolución del vínculo matrimonial; -recalca la impetrante- que en el convenio que anexó a la demanda de divorcio incausado manifestó que las necesidades de sus menores hijos era de *****, y el Aquo jamás valoró esa aseveración, e –insiste la apelante- que sólo se basó en lo que el demandado manifestó al dar contestación, que es lo que puede otorgar a sus menores hijos, cuando éste manifestó en diligencia de ocho de marzo de dos mil diecisiete, que cuenta con una *****, proponiendo solamente la cantidad de *****, para que sus menores hijos puedan comer tres veces al día, así como estudiar, obtener salud, vestido, calzado y alimentos que son de manera primordial y no hay algún lujo extra para los menores; que ambos se encuentran bajo tratamiento médico, por lo que la necesidad de recibir alimentos es indispensable para su bienestar y desarrollo, así como para poder sufragar los gastos tan altos que generan los tratamientos médicos a que están sometidos, y que el demandado sabe sobre los problemas de salud

de sus menores hijos; asimismo, alude la apelante, que demostró que el deudor alimentista cuenta con la posibilidad de suministrar los alimentos.

Que por tal razón y siendo primordial los alimentos de los menores y para no vulnerar sus derechos, el Juez de origen tuvo que haber solicitado los elementos necesarios para poder llegar a determinar sobre la pensión de alimentos hacia los menores; dice la recurrente que son aplicables las tesis de los rubros: *“PENSIÓN ALIMENTICIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PRIMARIO DEBE PROVEER, OFICIOSAMENTE, LA RECEPCIÓN DE AQUELLOS MEDIOS DE CONVICCIÓN NECESARIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, ACORDE CON LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)”*; *“PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)”* y *“PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE*

RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).”. [Las cuales transcribió la apelante y aquí se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones].

TERCERO. Este Tribunal Ad quem se abstiene de analizar los agravios expresados por la apelante *****, por su representación, por las siguientes consideraciones legales que enseguida se citan:

En principio, es importante precisar que en las actuaciones originales que integran el expediente *****, que fueron remitidas a esta Alzada para la substanciación del recurso de apelación que nos ocupa, y que por su propia naturaleza cuentan con valor de prueba plena, en términos del artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se desprende que la aquí apelante ***** promovió por su propio derecho Juicio de Divorcio Incausado, en contra de *****, y para ello exhibió la propuesta de convenio que alude el artículo 443 del Código Civil para el Estado, en donde planteó –entre otras cosas- que el demandado depositara a favor de sus menores hijos ***** y ***** de apellidos ***** *****, la cantidad de ***** con un incremento anual, por concepto de alimentos.

Al contestar la demanda ***** presentó una contrapropuesta de convenio, y en lo relativo a los alimentos para sus menores hijos, se comprometió a entregar puntualmente la cantidad de *****.

Ante las diferencias en los convenios exhibidos por los cónyuges, el Juzgador los citó a una junta que se celebró el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, a fin de que llegaran a un arreglo sobre los puntos propuestos, en términos de lo que establece el artículo 446 de la Legislación Sustantiva Civil, sin lograrlo, por lo cual, el Juez ordenó que se le turnaran los autos para dictar la resolución correspondiente.

Así, el día once de abril de dos mil diecisiete, el Juez declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a ***** y *****, y de conformidad con lo establecido en el artículo 450, primer párrafo, inciso b), fracciones II y III del Código Civil para el Estado, determinó como pensión provisional para los menores ***** y ***** de apellidos ***** *****, la cantidad de ***** mensuales, propuesta por el demandado, la que debe exhibir por ministraciones anticipadas, dejando expedito el derecho de las partes para que todo lo concerniente al convenio exhibido, lo hagan valer en la vía incidental respectiva.

Inconforme con esa determinación, ***** interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por esta Sala en el proveído de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, y de cuyos agravios se desprende que la promovente se duele únicamente en torno a la fijación de alimentos provisionales por el Juzgador.

Pues bien, respecto a lo anterior, debe decirse que los artículos 446, 447 y 448 del Código Civil para el Estado, son claros en establecer que si los cónyuges no llegaren a un arreglo respecto a los convenios que exhiban, el Juez decretará la disolución del vínculo matrimonial, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente, por lo que concierne al convenio; y por otra parte, el mismo ordenamiento legal establece que, para el caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 443, y ese convenio no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia.

Ahora bien, de conformidad con la doctrina jurisprudencial establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 1ª./J. 111/2012 (10ª.), 1ª./J. 116/2012 (10ª.), 1ª./J. 120/2012 (10ª.) y 1ª./J. 137/2012 (10ª.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013 páginas 592 y 519;

y Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, páginas 709 y 634, de los rubros:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.”

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DEL DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)”

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON IRRECURREBLES”, y,

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ

DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO DA CURSO O NIEGA ADMITIR LA DEMANDA O SOLICITUD DE AQUÉL.”

Tales criterios orientados establecen en lo conducente, que en los juicios de divorcio incausado, la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial, sólo tendrá el carácter de sentencia definitiva, si al mismo tiempo resuelve **totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio**, lo cual ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre todos los puntos contenidos en el convenio regulador de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, de manera que el Juzgador decreta el divorcio y sanciona el convenio en su totalidad, por considerar que éste no contraviene la ley.

El anterior supuesto lo contemplan los artículos 443 y 448 de la Legislación Sustantiva Civil para el Estado de Puebla, ya que el primero de los preceptos citados se refiere al convenio regulador de las consecuencias inherentes al divorcio, y el segundo de los numerales establece que si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 443, y éste no contraviene ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia.

En otro aspecto, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en

los referidos criterios ha sostenido que cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero no existe acuerdo de las partes en el convenio **regulador de las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio**, o sólo se aprueban algunos puntos del convenio en los que estuvieron de acuerdo las partes, y se dejan a salvo sus derechos en relación con las demás cuestiones inherentes al matrimonio, respecto de las que no hubo acuerdo, deben hacerlas valer en **la vía incidental** –como lo prevé el artículo 447 del Código Civil para el Estado de Puebla-; que en este caso, la resolución que disuelve el vínculo matrimonial no constituye una sentencia definitiva, sino que constituye una **resolución intermedia o auto definitivo que no pone fin al juicio**.

Esto último, de acuerdo con la postulación interpretativa del Tribunal más alto del País, es lo que acontece en la causa de origen, ya que de las constancias enviadas a esta Alzada, se desprende que la resolución en contra de la cual ***** interpuso recurso de apelación, se trata de un auto definitivo, puesto que en éste sólo se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre ***** y la misma ***** , dado que ambos a ningún acuerdo llegaron en relación con el convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio (como aquella relativa al monto de los alimentos en favor de los hijos).

En efecto, como se dijo con antelación, de las aludidas constancias se desprende que

***** promovió divorcio incausado, acompañando a su escrito de demanda la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, y por su parte, su cónyuge ***** dio contestación a la demanda de divorcio y exhibió contrapropuesta de convenio, y que al existir diferencias entre los convenios exhibidos por las partes, el Juez de origen señaló día y hora para la celebración de una junta para los efectos precisados en el artículo 446 del Código Civil para el Estado, misma junta en la que los cónyuges no llegaron a acuerdo alguno en relación con la solicitud de divorcio, ni respecto a la propuesta y contrapropuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial –convenio a que refiere el artículo 443 del ordenamiento legal citado-.

En esa tesitura, mediante resolución de once de abril de dos mil diecisiete, que es aquella en contra de la cual ***** interpuso recurso de apelación, el Juez de origen dictó resolución decretando la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre ***** y ***** , dejando expedito el derecho de las partes para promover las acciones procedentes, exclusivamente por lo que concierne al convenio a que se refiere el artículo 443 del Código Civil estatal.

De ahí que esta Sala considere, que la resolución dictada por el Juez de origen el once de abril de dos mil diecisiete, cuya impugnación

pretende la señora ***** , a través de la apelación, no se trata de una sentencia definitiva, sino de un auto definitivo que por lo mismo no pone fin al juicio, habida cuenta que el A quo dejó expedito el derecho de los divorciantes, para que lo hagan valer por la vía incidental por lo que concierne al convenio regulador de las cuestiones inherentes a la disolución del matrimonio.

Por tanto, partiendo de la base de que la resolución en comento, se trata de un auto definitivo o intermedio, tenemos que en su contra no procede el recurso de apelación, ya que no encuadra en los supuestos que al efecto marca el artículo 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

Lo anterior se afirma porque el artículo citado con antelación establece que el recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas, o en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia.

De manera que si la resolución dictada por el Juez, no se trata de una sentencia definitiva, puesto que ante el desacuerdo de los divorciantes en relación con el convenio a que se refiere la ley, decretó la disolución del vínculo matrimonial, y aunque haya fijado de manera provisional los alimentos a favor de los menores ***** y ***** ***** , ambos de apellidos ***** , tal determinación no se trata de una

resolución definitiva, ni de aquellas que sin decidir el fondo del negocio pone fin a la instancia, pues como ya se dijo, se trata de un auto definitivo o intermedio que no puso fin al juicio, y ante la falta de acuerdo de las partes, el Juez dejó expedito el derecho de éstas para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente, por lo que concierne al convenio, tal como lo prevé el artículo 447 del Código Civil.

En ese contexto, si la resolución dictada por el Juez el once de abril de dos mil diecisiete, no encuadra en los supuestos indicados en el artículo 377 del Código Procesal Civil, es evidente que, el recurso de apelación interpuesto por ***** resulta improcedente, y en esa razón no es dable el estudio de los agravios propuestos, con la consecuencia de quedar incólume al fallo debatido.

No es obstáculo a lo anterior que, en auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, esta Sala haya admitido a trámite el recurso de apelación, que presentó la propia inconforme, pues es de explorado derecho que, los autos admisorios no causan estado, y que es obligación de la autoridad, en todo tiempo, verificar la procedencia de las peticiones que hagan los promoventes, por tratarse de una cuestión de orden público; además que, resultaría contrario a derecho admitir la procedencia de un recurso de apelación en contra de una resolución que no lo admite.

Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 3ª. 52, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46, número 23, mayo de 1990, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: **“REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.”**

Adicionalmente, cabe mencionar que admitir la procedencia del recurso de apelación, en contra de la resolución que, como en la especie, decretó el divorcio, conduciría a desnaturalizar el tratamiento que el legislador determinó para el divorcio incausado, pues de la recta intelección de las disposiciones legales que lo norman, se concluye que ante la falta de arreglo de los cónyuges, respecto al convenio regulador de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el Juez de lo Familiar, únicamente debe decretar al divorcio, y dejar para la vía incidental la resolución de esas cuestiones objeto del convenio, además de que el procedimiento de divorcio sin expresión de causa, fue concebido por el legislador, como un medio efectivo de eliminar conflictos en el proceso de disolución del matrimonio a la real tutela al bien jurídicamente protegido, consistente al respeto a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

En efecto, para la disolución del vínculo matrimonial, basta la manifestación de la voluntad

del cónyuge que promovió de manera unilateral el divorcio incausado, pues debe entenderse que, esa figura constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que, basta que aparezca expresada la voluntad de alguno de los cónyuges, para disolver el vínculo matrimonial que tiene con el otro, para que la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto, autorice esa ruptura o disolución que a final de cuentas, sólo constituye una resolución de carácter declarativo, al limitarse a evidenciar una situación jurídica determinada, como es el rompimiento de hecho de las relaciones efectivas entre los consortes.

Se afirma lo anterior, porque el más alto Tribunal de la Nación ha establecido diversos criterios en torno a que la disolución del vínculo matrimonial, en el divorcio incausado, atiende primordialmente a la voluntad de uno solo de los cónyuges, para no seguir unido en matrimonio, pues con la manifestación de esa voluntad, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye el modo en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, la forma en que éste decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª.LIX/2015 (10ª.) consultable a página 1392, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

del rubro y texto siguientes: **“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.”**

Así como la tesis 1ª. LX/2015 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1394, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: **“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL DERIVADO DE AQUÉL, SÓLO CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE UNA**

SITUACIÓN DE HECHO RESPECTO DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS CÓNYUGES. Considerando que en el divorcio sin expresión de causa es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna, sino exclusivamente a su deseo de ya no continuar casado. Así, la disolución del vínculo matrimonial por parte del Estado constituye sólo el reconocimiento de éste de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, donde la voluntad de uno solo de ellos, de no permanecer en matrimonio atiende al derecho al libre desarrollo de la personalidad.”

CUARTO. Finalmente, este Cuerpo Colegiado estima justo no hacer especial condena en costas generadas con motivo del trámite de la segunda instancia, por tratarse de un asunto de naturaleza familiar.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Por las razones dadas en el cuerpo de esta resolución, se declara improcedente el recurso de apelación hecho valer contra el auto definitivo dictado el once de abril de dos mil diecisiete, por el que se decretó el divorcio

solicitado únicamente y no respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio y a su disolución, por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente ***** , relativo al Juicio de Divorcio Incausado, promovido por ***** , en contra de ***** , por ende queda firme aquel.

SEGUNDO. No se formula especial condena en costas de este recurso.

TERCERO. En su oportunidad y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y archívese el presente toca como asunto concluido.

Notifíquese como corresponda.

Así, por unanimidad, lo resolvieron los Magistrados David López Muñoz, Joel Sánchez Roldán y Elier Martínez Ayuso, que integran la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, habiendo sido ponente el primero de los nombrados y firman ante el Licenciado José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, Secretario que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en el artículo 80, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y conforme a lo dispuesto en los artículos Quincuagésimo séptimo y Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.